



00000023

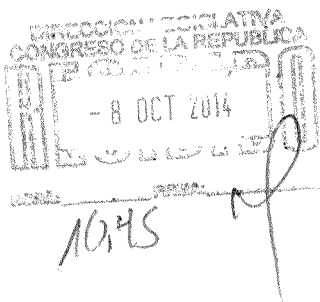
*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C.A.*

07 de octubre del 2014.

Licenciada
Ana Isabel Antillón
Directora Legislativa
Congreso de la República

De manera atenta me dirijo a usted y de conformidad con lo estipulado en los artículos 39, 40 y 41 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, adjunto a la presente **DICTAMEN FAVORABLE** emitido por esta Comisión a la iniciativa de ley identificada con número 4428 que dispone aprobar **"LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL Y PROTECCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA "**.

Atentamente,



Héctor Leonel Lira
Presidente



00000024

*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

DICTAMEN No. 03-2014

**INICIATIVA 4428
LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO
PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL Y PROTECCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA**

HONORABLE PLENO:

Con fecha veintidós de noviembre de dos mil once el Honorable Pleno del Congreso de República conoció y remitió a la Comisión Extraordinaria de Reforma al Sector Justicia, la iniciativa de ley presentada por varios legisladores con registro número 4428 que dispone aprobar la Ley Orgánica del Instituto para la Atención Integral y Protección a Víctimas de Violencia (o "el Instituto de la Víctima").

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa de Ley contiene 54 artículos, los cuales se dividen de la forma siguiente:

1. TITULO I: CAPITULO I (CAP. I), DISPOSICIONES GENERALES (artículos 1 y 2); CAP. II, DE LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS (arts. 3 y 4); CAP. III, DEL INSTITUTO (arts. 5, 6, 7, 8, 9 y 10); y, CAP. IV, INTEGRACION (artículos del 11 al 25).
2. TITULO II: CAP. I, DE LA ASESORIA Y ATENCION A LA VICTIMA (arts. 26 y 27); CAP. II, DE LA REPARACION DEL DAÑO (art. 28), CAP. III, DE LA RED NACIONAL DE DERIVACION PARA LA ATENCION A VICTIMAS DE DELITOS (artículos del 29 al 35)
3. TITULO III: CAP. I, REGIMEN DISCIPLINARIO DEL INSTITUTO (arts. 36, 37, 38 y 39)
4. TITULO IV: REFORMAS (artículos del 40 al 47)
5. TITULO V: DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS (artículos del 48 al 54)

Podría resumirse entonces que la iniciativa contempla en sus primeros tres títulos la creación y forma en que ha de operar el Instituto y en los dos títulos restantes, las reformas al código procesal penal que hacen que la iniciativa sea viable, así como acciones iniciales que hay que tomar para que pueda comenzar a funcionar de forma adecuada el mismo.





00000025

*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C.A.*

ANTECEDENTES

Las Declaraciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en principio no tienen carácter vinculante, salvo en las partes que han adquirido obligatoriedad por constituir costumbre internacional, es decir que prueben una práctica generalmente aceptada como derecho, como es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, las Declaraciones dan sentido a las obligaciones de los tratados y por haber sido suscritas en órganos en los que participa el Estado de Guatemala, como la Asamblea General de las Naciones Unidas, son instrumentos cuya observancia y cumplimiento también es responsabilidad del Estado¹. Entre las Declaraciones se encuentra la *"Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delito y del Abuso de Poder"* que establece que *"las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad. Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional"* (artículo 4) y para ello *"se establecerán y reforzarán, cuando sea necesario, mecanismos judiciales y administrativos que permitan a las víctimas obtener reparación mediante procedimientos oficiales u oficiosos que sean expeditos, justos, poco costosos y accesibles. Se informará a las víctimas de sus derechos para obtener reparación mediante esos mecanismos"* (artículo 5). Y para hacer efectivo los derechos antes citados se *"facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos de las víctimas prestándoles asistencia apropiada durante todo el proceso judicial"* (artículo 4, literal c) y *"adoptando medidas para minimizar las molestias causadas, proteger su intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia"* (artículo 4, literal d), entre otros aspectos.

Estos derechos -aunque no expresamente- han sido reconocidos por la legislación nacional. En primer término por la Ley Orgánica del Ministerio Público, que específicamente establece en relación a la víctima que *"el Ministerio Público, deberá dirigir sus acciones tomando en cuenta los intereses de la víctima, a quien deberá brindar amplia asistencia y respeto. Le informará acerca del resultado de las investigaciones y notificará la resolución que pone fin al caso, aun cuando no se haya constituido como querellante"* (artículo 8). Y para dar cumplimiento a dicha obligación regula

¹ Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos –OACNUDH- Guatemala, *"Guía práctica sobre principios aplicables a la administración de justicia penal juvenil y a la privación de libertad de adolescentes en conflicto con la ley penal"*, Guatemala, 2008, página 13





00000026

*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C.A.*

la creación y funcionamiento de la Oficina de atención a la víctima². Sin embargo, siempre la contempla como un actor secundario que debe ser tomado en cuenta por el fiscal encargado del caso, sin darle necesariamente un papel principal dentro del proceso, cuando es la víctima la principal afectada por el delito cometido.

Esta última situación fue percibida por la Corte Suprema de Justicia –CSJ- y materializada en la iniciativa 4273 que dispuso aprobar reformas al decreto 51-92 del Congreso de la República, Código Procesal Penal. En la exposición de motivos argumentó que *“puede afirmarse técnicamente que estamos, después de dieciséis años (ahora dieciocho), al final de la etapa de readecuaciones normativas con la presente iniciativa..., por cuanto plantea aspectos de urgente y necesaria prioridad procesal, dirigidos a ampliar el acceso de la justicia a las víctimas y generar, así condiciones para la tutela judicial efectiva”*. Dicha iniciativa fue dictaminada favorablemente por esta Comisión con fecha 19 de noviembre de 2010, haciendo las modificaciones del caso. Para el efecto reafirmó la preocupación manifestada por la CSJ al exponer que *“comparte la necesidad que se le dé a la víctima del delito una tutela judicial efectiva, que se traduzca principalmente en: visibilizarla al hacer explícito el reconocimiento general que debe de procurársele una tutela judicial efectiva, al igual que a las otras partes; resguardar su derecho a ser informada; eliminar la figura del actor civil tal y como estaba concebida a fin de eliminar obstáculos en el proceso; facultarla para objetar la desestimación cuando esta se pretenda; entre otras”*.

Sin embargo la víctima, tres años después de dichas reformas que fueron introducidas al ordenamiento penal a través del decreto 7-2011 que entró en vigencia en junio de dicho año, sigue estando en su mayoría frente a los casos de violencia en una situación de desprotección. A pesar que, por ejemplo, el artículo 1 de dicho decreto, el cual reforma el artículo 5 del Código Procesal Penal que establece cuáles son los fines del proceso, reconoce que la víctima o *agraviado como sujetos procesales, tienen derecho a la tutela judicial efectiva y que el procedimiento por aplicación del principio del debido proceso, también debe responder a sus legítimas pretensiones*.

Esta situación ha llevado a repensar las acciones que debe emprender el Estado de Guatemala para proveer a la víctima de una tutela efectiva. De allí ha surgido la necesidad de crear un instituto autónomo que funcione de manera similar al Instituto de la Defensa Pública Penal, con el principal objetivo de brindar **atención integral y protección a víctimas de violencia**.

² Artículo 26, Ley Orgánica del Ministerio Público, dto. 40-94 del Congreso de la República: *Los fiscales de distrito organizarán las oficinas de atención a la víctima para que se encargue de darle toda la información y asistencia urgente y necesaria.*





00000027

*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C.A.*

Si se analizan las actuales estadísticas de violencia en Guatemala se puede llegar fácilmente a la conclusión que estamos en un país que sufre. Sólo en el último año perdieron la vida a causa de la violencia 6,072 personas, 47 más que en 2012³, lo cual suma 12,097 personas muertas sólo en lo que va de este Gobierno. Esto significa una igual cantidad de víctimas o agraviados, entendidas estas según el código procesal penal y el mismo proyecto en análisis, no sólo como la persona que ha sufrido lesiones físicas o mentales, sino también a su cónyuge, conviviente, hijos y a la falta de éstos, a los hermanos, ascendientes y descendientes. Si a las cifras anteriores se agregan las víctimas de otros delitos, como por ejemplo el robo de vehículos, que según cifras de la Policía Nacional Civil –PNC- de 2011 para agosto de 2013 ascendían a 18,217⁴, podemos decir que en ese período se robaron casi 18 carros por día. Lo cual significa que diariamente sólo a causa de estos delitos hay más de 35 víctimas diarias.

Además de las razones anteriores esta ley busca complementar el trabajo que desempeña la Oficina de Atención a la Víctima (OAV) del Ministerio Público, la cual por cuestiones presupuestarias y por no tratarse expresamente de una facultad que se le delegue al Ministerio Público se limita a prestar asesoría a la víctima cuando esta se encuentra en un estado de crisis y no lo hace durante todo el proceso.

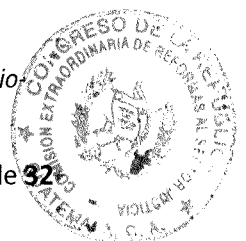
ANÁLISIS DE LA INICIATIVA

Como se resumió antes la iniciativa al crear el Instituto de la Víctima aborda tres aspectos importantes que divide en títulos. Los cuales son los siguientes:

1. TÍTULO I, en el que se regula lo siguiente:
 - Disposiciones generales: establece el objeto (a.1) y la forma de interpretar la ley en relación a disposiciones que afecten a la víctima (a.2).
 - Los derechos de las víctimas: establece qué debe entenderse por víctima (a.3) y qué por persona agraviada (a.4) y hasta donde llegan los derechos de esta última,

³ Albani, Paolina, Diario **La Hora**, "Inacif: 6 mil 072 muertes violentas en 2013; 47 más que el año pasado", Sección de Actualidad, Guatemala, 2014, vínculo:
<http://www.lahora.com.gt/index.php/nacional/guatemala/actualidad/189071-inacif-6-mil-072-muertes-violentas-en-2013-47-mas-que-el-ano-pasado>

⁴ García, Jordy, *ibid.* "En promedio, se roban 19 carros diarios", vínculo:
<http://www.lahora.com.gt/index.php/nacional/guatemala/reportajes-y-entrevistas/185642-en-promedio-se-roban-19-carros-diarios->





00000028

*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C.A.*

enumera los derechos que el Estado reconoce a la víctima sin excluir otros que estén contenidos en otras leyes (a.5).

- La creación (a.6), fines (a.7), funciones (a.10 y 11) y ámbito de cobertura (a.8) y de competencia funcional (a.9) del Instituto.
- La forma en que se integra el Instituto para cumplir con los fines y funciones anteriores (a.12), y se describe cada una de las funciones de los órganos y direcciones que lo conforman siendo estos:
 - Consejo (a.13 a 15)
 - Dirección General (a.16 al 18)
 - Dirección de Asesoría Jurídica (a.20, 23 y 24)
 - Dirección de Asistencia Médica (a.21)
 - Dirección de Asistencia Psicológica (a.22)
 - Dirección de Asistencia Social (a.25)
 - Personal auxiliar, administrativo y de auditoría (a.26)
 - Auditoría Interna (a.27 y 28)

2. TÍTULO II, en el que se regula lo siguiente:

- Los servicios que proveerá el Instituto (a.29) y las funciones generales de todos los funcionarios o empleados públicos que estén involucrados en su prestación (a.30)
- La obligación por parte del Instituto de informar a la víctima sobre su derecho a una reparación digna (a.31).
- La Red Nacional de Derivación para la Atención de Víctimas de Delitos (a.32 y 33), su objetivo (a.34), su cobertura geográfica (a.35), la coordinación entre esta y el Instituto de la Víctima (a.36), la forma en que se integra (a.37), los tipos de apoyo a la víctima que presta (a.38) y la obligación del Instituto de establecer un registro (a.39).

3. TÍTULO III, en el que se regula lo siguiente:

- El régimen disciplinario que regirá en el Instituto de la Víctima para sus trabajadores (a.40), la clasificación de las faltas y sanciones (a.41), los procedimientos para hacerlo efectivo (a.42) y cuáles son los plazos de prescripción (a.43).

4. TÍTULO IV, en el que se regulan las siguientes reformas al Código Procesal Penal:

- Al artículo 82, que regula el desarrollo de la primera audiencia, se le permite a la víctima participar en ella.
- Al artículo 117, que define la figura del agraviado (incluye la víctima), se le faculta





00000029

*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C.A.*

- a la víctima para ser representada o acompañada por un abogado del Instituto.
 - Al artículo 120, que regula los momentos en que puede participar el querellante adhesivo, se le faculta para participar también cuando se establezcan o modifiquen las medidas de seguridad para el recluso.
 - Al artículo 124, que regula la reparación digna y el procedimiento para solicitarla, se faculta a la víctima o agraviado a que la pueda solicitar en cualquier momento del proceso.
 - A los artículos 277, 495, 496 y 497, para establecer específicamente que el agraviado (dentro de los cuales se incluye a la víctima) también gozará de las facultades que estos artículos le otorgan a otras partes procesales.
5. TITULO V, regula las disposiciones finales y transitorias, dentro de las cuales vale la pena destacar las siguientes:
- La instalación del Consejo por parte del Congreso de la República.
 - La asignación presupuestaria que le corresponderá para iniciar a funcionar, que será de veinticinco millones de quetzales.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

La Comisión al analizar la iniciativa 4428 la consideró oportuna. Sin embargo, reparó en que hay aspectos que deben ser modificados para lograr viabilidad y eficiencia en la prestación de los servicios de asesoría que brinda el Instituto de la Víctima.

Estas modificaciones son las siguientes (se resaltan en **negrilla**):

1. La diferenciación entre víctima y persona agraviada, sin afectar otras regulaciones que ya existen respecto a la víctima, con el objeto que la asesoría jurídica sea prestada privilegiadamente a la víctima directa y con ello exista una unificación de sus pretensiones dentro del proceso penal, y en su defecto, a las personas que también sufrieron un agravio de forma indirecta por la comisión del delito. De allí que se modificó el artículo 3 (ahora artículo 2, en virtud de la eliminación del artículo original) de la iniciativa en la forma siguiente:

"Artículo 2. Víctima.

Sin perjuicio de lo que establecen otras leyes respecto a la víctima, para efectos de esta ley se entiende por víctima a la persona que, individual o colectivamente, haya sufrido lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo





00000030

*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C.A.*

sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones realizadas en su contra, tipificadas como delito y sancionadas por la legislación penal.

~~Para efectos de esta ley también~~ **Sin perjuicio de lo que establece el artículo 117 del Código Procesal Penal**, se considera ~~víctima~~ **persona agraviada** al cónyuge, conviviente, hijos y a la falta de éstos, a los hermanos, ascendientes y descendientes de la víctima.

A la vez se incluye un nuevo artículo con el objeto de establecer que la diferencia entre los servicios que el Instituto de la Víctima le presta a uno y otro radica únicamente en relación a la asesoría jurídica:

"Artículo 3. Persona agraviada.

La persona agraviada podrá solicitar los servicios que el Instituto proporciona a la víctima. Sin embargo, cuando la víctima se encuentre total o parcialmente imposibilitada la persona agraviada podrá querellarse en su nombre y para el efecto el Instituto de la Víctima le proveerá de un abogado para que la auxilie profesionalmente en la forma y con las limitaciones que establece la ley.

Las disposiciones de este artículo no limitan derechos que otras leyes le reconozcan a la víctima y a la persona agraviada."

2. El otorgamiento de personalidad jurídica y autonomía al Instituto. De allí que se modificó el artículo 5 de la iniciativa en la forma siguiente:

"Artículo 56. Instituto para la Atención Integral y Protección a Víctimas de Violencia.

Se crea el Instituto para la Atención Integral y Protección a Víctimas de Violencia ~~adscrita administrativamente a la Vicepresidencia de la República, la cual funcionará de acuerdo a lo establecido en el reglamento respectivo.~~ como persona jurídica autónoma, con patrimonio propio e independencia funcional y orgánica, Al cual también se le podrá referir como Instituto de la Víctima.

El Instituto para la Atención Integral y Protección a Víctimas de Violencia se regirá por la presente ley y su reglamento.

3. Se limita el número de personas a las que el Instituto de la Víctima está obligado a brindar asesoría, privilegiando a aquellas que hayan sido víctimas o agraviadas de hechos: cuyas consecuencias sean más graves; y/o, en que el bien jurídico tutelado sea afectado de forma irreparable, sin dejar de tener en cuenta los derechos que la "Ley Contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer" (decreto 22-2008 del Congreso de la República) ya le reconocen a las víctimas de violencia. En línea con esta reforma se trasladan las funciones que esa ley le otorga al Instituto de la Defensa Pública Penal al Instituto que aquí se pretende crear. De allí que se modificó el artículo 8 (ahora 9) de la iniciativa en la forma siguiente:





00000031

*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C.A.*

“Artículo 8. Ámbito de competencia funcional.

El Instituto de la Víctima brindará atención inmediata a todas las víctimas y/o agraviados que acudan a solicitar sus servicios. En base a criterios establecidos por la institución, asumirá los casos que le competan, sin menoscabo de derivar la atención de los demás casos a otras instituciones en conformidad a la Ley.

Únicamente podrá actuar en aquellos casos que se busque perseguir o que el Ministerio Público ya esté persiguiendo a personas por hechos constitutivos de los delitos siguientes:

- ***Delitos contra la vida.***
- ***Delitos de violación en todas sus clasificaciones regulados dentro de los delitos contra la libertad y la seguridad sexual y contra el pudor.***
- ***Delitos de robo agravado.***
- ***Delitos contra la libertad y seguridad de la persona.***
- ***Delitos que se establezcan en leyes especiales cuya pena de privación de libertad mínima sea mayor a seis años o que no sean conmutables.***
- ***Y en los casos establecidos en el decreto 22-2008 del Congreso de la República.”***

4. Se estableció que el Consejo del Instituto de la Víctima tendrá funciones de asesoría y propuesta principalmente, logrando de esta forma que el Director o Directora General del mismo, electo por el Congreso de la República, sea la autoridad máxima. A la vez que se estableció la obligación de que celebren reuniones ordinarias por lo menos una vez cada dos meses para dar seguimiento a las acciones que se lleven a cabo.

También se realizaron las modificaciones que en el cuerpo del decreto se resaltan en negrilla, que a consideración de esta Comisión deben hacerse para complementar los artículos antes citados o para hacer más explícito el espíritu de la ley.





00000032

*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C.A.*

DICTAMEN DE LA COMISIÓN

En base a las consideraciones constitucionales, legales y políticas vertidas anteriormente, esta Comisión emite DICTAMEN FAVORABLE CON MODIFICACIONES a la iniciativa 4428, que dispone aprobar LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL Y PROTECCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA, por ser un Proyecto de Decreto viable, oportuno, conveniente y Constitucional.

Dado en la sala de la Comisión Extraordinaria de Reforma al Sector Justicia del Congreso de la República de Guatemala, en la ciudad de Guatemala el día tres de octubre de dos mil catorce.


Héctor Leonel Lira
Presidente


Gustavo Adolfo Echeverría
Vicepresidente


Carlos Enrique López Girón
Secretario


Nineth Varenca Montenegro



Luis Pedro Alvarez Morales





000000033

*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C.A.*


Delia Emilda Back Alvarado


Oscar Stuardo Chinchilla Gúzman

Carlos Alberto Martínez Castellanos


Hugo Francisco Morán


Juan José Porras Castillo

Guatemala, 03 de octubre 2014.





00000034

*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C.A.*

**DECRETO NÚMERO _-2014
DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA**

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política de la República de Guatemala y los tratados y convenios internacionales ratificados por Guatemala establecen los principios básicos en que se sustenta la administración de justicia y que deben ser incorporados adecuadamente en el marco del ordenamiento jurídico interno con el afán de asegurar su observancia en atención a las necesidades y posibilidades del Estado de Guatemala.

CONSIDERANDO

Que es una realidad percibida por la población víctima o afectada por la violencia en Guatemala que no existen los mecanismos que permitan a la víctima hacer valer sus derechos dentro de un proceso penal a pesar de que los mismos ya fueron reconocidos.

CONSIDERANDO

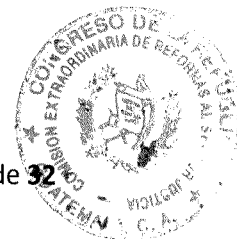
Que el Instituto para la Atención Integral y Protección a Víctimas de Violencia es una solución para lograr hacer que el acceso a la justicia por parte de personas afectadas por la violencia sea una realidad y a la vez equiparé la atención que el Estado de forma gratuita le otorga al acusado dentro del proceso a través del Instituto de la Defensa pública penal.

CONSIDERANDO

Que de esta forma se resguardan las legítimas pretensiones de justicia que la víctima o persona agraviada tiene dentro del proceso y que con una institución como esta se logra evitar la doble, triple y múltiple victimización a que las personas que buscan justicia están sujetas por razón de su condición de pobreza.

POR TANTO

El Congreso de la República de Guatemala, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 171 inciso a) de la constitución política de la República de Guatemala,





00000035

*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C.A.*

DECRETA

LEY ORGÁNICA DEL
INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL Y PROTECCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

TITULO I
CAPITULO I
DISPOSICION ES GENERALES

Artículo 1. Objeto.

Esta Ley tiene por objeto reconocer y garantizar el goce y ejercicio de los derechos de la víctima de violencia.

CAPITULO II
DE LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS

Artículo 2. Víctima.

Sin perjuicio de lo que establecen otras leyes respecto a la víctima, para efectos de esta ley se entiende por víctima a la persona que, individual o colectivamente, haya sufrido lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones realizadas en su contra, tipificadas como delito y sancionadas por la legislación penal.

Sin perjuicio de lo que establece el artículo 117 del Código Procesal Penal, se considera **persona agraviada** al cónyuge, conviviente, hijos y a la falta de éstos, a los hermanos, ascendientes y descendientes de la víctima.

Artículo 3. Persona agraviada.

La persona agraviada podrá solicitar los servicios que el Instituto proporciona a la víctima. Sin embargo, cuando la víctima se encuentre total o parcialmente imposibilitada la persona agraviada podrá querellarse en su nombre y para el efecto el Instituto de la Víctima le proveerá de un abogado para que la auxilie profesionalmente en la forma y con las limitaciones que establece la ley.

Las disposiciones de este artículo no limitan derechos que otras leyes le reconozcan a la víctima y a la persona agraviada.

Artículo 4. Derechos.

Las víctimas tienen los siguientes derechos conforme lo dispone la ley:





00000036

*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C.A.*

- a. A que se les trate con justicia y respeto a su dignidad e intimidad desde el momento que requiera los servicios del Instituto. De ser necesario se deberá gestionar su traslado para la atención médica adecuada sin menoscabo de la investigación criminal que se requiera.
- b. A que se les informe de sus derechos y su papel dentro del proceso penal, del desarrollo de la investigación criminal, la reparación del daño sufrido y de los mecanismos judiciales y administrativos para obtenerla, así como también que se le notifique las resoluciones judiciales. **En este último caso podrá señalar como lugar para recibir notificaciones la sede del Instituto de la Víctima cuando haya solicitado sus servicios de asesoría jurídica.**
- c. A que las instituciones del sistema de justicia escuchen y tomen en cuenta la información y elementos de prueba brindados por la víctima, para que estos sean diligenciados y se investigue.
- d. A gestionar ante la autoridad correspondiente las medidas de protección y seguridad necesarias para resguardar su vida, integridad física, domicilio, posesiones o derechos, incluyendo los de sus cónyuges o convivientes y familiares dentro de los grados de ley cuando demuestren que estos pueden ser afectados por los presuntos responsables del delito o por terceros implicados.
- e. A estar razonablemente protegida durante todo el desarrollo del proceso penal, evitando que se le exponga innecesariamente para preservar su vida, integridad física y estabilidad psicológica.
- f. A estar presentes en todos los actos procesales en los cuales el imputado tenga ese derecho.
- g. A que el Fiscal o el abogado del Instituto de la Víctima dé aviso al empleador de la víctima, para que pueda ausentarse de su trabajo con goce de sueldo o salario, para que pueda comparecer, las veces que sea necesario, a prestar testimonio o a participar en cualquier diligencia relacionada con su proceso penal, sin que estas comparecencias sean causales de represalias o despidos.
- h. A que se le devuelva cualquier bien que le pertenezca según lo establece la ley.
- i. A manifestar por sí, o por su representante dentro del proceso, lo que a su derecho convengan.
- j. A que se le preste atención psicológica de urgencia, así como orientación social cuando la requiera. Dicha atención puede estar a cargo de facultativos de su mismo sexo, cuando lo solicite.
- k. A que se respete y apliquen las leyes ordinarias sobre la privacidad de su proceso.
- l. A contar con servicios victimológicos especializados, a fin de recibir gratuitamente tratamiento postraumático para la recuperación de su salud física y mental.
- m. A no ser objeto de exploración física sin su consentimiento explícito y siempre que el propósito de dicho procedimiento sea totalmente indispensable y de interés para el curso





00000037

*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C.A.*

- n. del proceso penal. En el caso de los menores de edad debe de contar con el consentimiento y acompañamiento de sus padres, tutores o guardianes. De igual forma si la víctima lo solicita podrá estar acompañada de la persona que designe.
- o. A los demás derechos que señalen las leyes.

Para el cumplimiento de estos derechos se llevará a cabo la concentración, articulación y coordinación con instituciones y establecimientos de salud o de carácter cultural, educativo y científico, así como con prestadores de servicios de carácter victimológico, legal, médico, psicológico, sociológico, asistencial y cualquier otro vinculado con las ciencias penales y victimológicas, que proporcionen atención a víctimas.

La calidad de víctima es independiente de que se identifique, aprehenda, enjuicie y/o condene al o los responsables del delito.

**CAPITULO III
DEL INSTITUTO**

Artículo 5. Instituto para la Atención Integral y Protección a Víctimas de Violencia.

Se crea el Instituto para la Atención Integral y Protección a Víctimas de Violencia **como persona jurídica autónoma, con patrimonio propio e independencia funcional y orgánica. Al cual también se le podrá referir como Instituto de la Víctima.**

El Instituto para la Atención Integral y Protección a Víctimas de Violencia se regirá por la presente ley y su reglamento.

Artículo 6. Fines.

La finalidad del Instituto de la Víctima será proporcionar los servicios de asesoría jurídica, psicológica y social a las víctimas.

Para los efectos anteriores el Instituto para la Atención Integral y Protección a Víctimas de Violencia proporcionará directamente los referidos servicios y/o coordinará, acciones con instituciones y organizaciones públicas o privadas que participen en la Red Nacional de Derivación y otras, para garantizar a las víctimas los servicios descritos en el párrafo anterior.

Artículo 7. Ámbito de cobertura.

El Instituto para la Atención Integral y Protección a Víctimas de Violencia, tendrá cobertura y brindará atención en todo el territorio nacional.

Esta cobertura podrá ser ampliada fuera del territorio nacional a solicitud de parte por los conductos diplomáticos correspondientes.

En el caso de menores de edad, cuando le corresponda, actuará de oficio en coordinación con la Procuraduría General de la Nación.





00000038

*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C.A.*

Artículo 8. Ámbito de competencia funcional.

El Instituto de la Víctima brindará atención inmediata a todas las víctimas y/o agraviados que acudan a solicitar sus servicios. En base a criterios establecidos por la institución asumirá los casos que le competan, sin menoscabo de derivar la atención de los demás casos a otras instituciones en conformidad a la Ley.

Únicamente podrá actuar en aquellos casos que se busque perseguir o que el Ministerio Público ya esté persiguiendo a personas por hechos constitutivos de los delitos siguientes:

- Delitos contra la vida.
- Delitos de violación en todas sus clasificaciones regulados dentro de los delitos contra la libertad y la seguridad sexual y contra el pudor.
- Delitos de robo agravado.
- Delitos contra la libertad y seguridad de la persona.
- Delitos que se establezcan en leyes especiales cuya pena de privación de libertad mínima sea mayor a seis años o que no sean conmutables.
- Y en los casos establecidos en el decreto 22-2008 del Congreso de la República.

Artículo 9. Obligaciones.

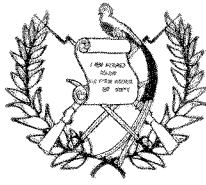
El Instituto de la Víctima deberá:

- a. Informar a la Policía Nacional Civil, Ministerio Público o al Organismo Judicial de la comisión de un hecho delictivo del cual tuviere conocimiento a partir de la recepción de una persona víctima o agraviada.
- b. Crear unidades con personal especializado para la atención a las víctimas, que incluya asesoría legal, atención psicológica y servicio social.
- c. Crear un sistema informático que permita el registro de los requerimientos presentados por la víctima y las actuaciones realizadas por el personal.
- d. Elaborar mecanismos de protección para la víctima, en apoyo a la labor del Ministerio Público en el caso concreto.
- e. Elaborar políticas públicas y planes de trabajo para la implementación y funcionamiento adecuado de las redes de derivación.
- f. Elaborar políticas públicas que contribuyan a la prevención del delito y a la reducción de la victimización.

Artículo 10. Otras obligaciones.

Es deber de los servidores públicos llevar a cabo, en el marco de sus respectivas competencias, las acciones que sean necesarias para el efectivo cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley.





00000039

*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C.A.*

**CAPITULO IV
INTEGRACION**

Artículo 11. Integración.

El Instituto para la Atención Integral y Protección a Víctimas de Violencia se integra de la forma siguiente:

- a. Consejo
- b. Dirección General
- c. Secretaría General
- d. Dirección de Asesoría Jurídica
- e. Dirección de Asistencia psicológica
- f. Dirección de Asistencia Social
- g. Departamento Administrativo y Financiero
- h. Unidad de Capacitación
- i. **Oficina de Auditoría interna.**

Artículo 12. Consejo.

Se crea el Consejo del Instituto para la Atención Integral y Protección a Víctimas de Violencia, el cual estará integrado por:

- a. El Fiscal General y Jefe del Ministerio Público o un representante de la más alta jerarquía;
- b. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia o un magistrado de la misma;
- c. **El o la presidente** de la Comisión de la Mujer del Congreso de la República;
- d. **El o la presidente** de la Comisión del Menor y la Familia del Congreso de la República;
- e. El Ministro de Salud Pública y Asistencia Social o el Viceministro de Atención Hospitalaria;
- f. El Ministerio de Gobernación o el Viceministro de Prevención de la violencia y el delito
- g. Dos representantes de la sociedad civil especializada en el tema de atención a víctimas que estén registradas en el Instituto de la Víctima de acuerdo a lo establecido en el artículo 38 de la presente ley.
- h. El Director o Directora General del Instituto de la Víctima, quien fungirá como secretario del mismo y podrá participar con voz pero sin voto.

Los miembros del Consejo durarán en su cargo mientras se encuentran ejerciendo el período para el que fueron electos o nombrados. El sólo acto de su nombramiento o elección bastará para poder comenzar a actuar en el Consejo. Los representantes de la sociedad civil especializada en el tema de atención a víctimas, durarán en sus cargos 4 años, pudiendo ser reelectos por un período más. **Serán electos por el Procurador de los Derechos Humanos.**





00000040

*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C.A.*

El Reglamento determinará la forma de elección de los representantes de la sociedad civil especializada en el tema de atención a víctimas que integrará el Consejo.

Artículo 13. De las funciones.

Las funciones del Consejo del Instituto para la Atención Integral y Protección a Víctimas de Violencia son:

- a) Convocar a la población en general para la presentación de personas idóneas para el cargo de Director o Directora General del Instituto.
- b) Elevar al Congreso de la República la terna para que se elija al Director o Directora.
- c) Proponer y asesorar en la elaboración del Reglamento de la presente Ley y demás normas internas.
- d) Proponer y asesorar en la elaboración de políticas institucionales a favor de las víctimas.
- e) Proponer y asesorar sobre el Plan de Política Institucional a favor de las Víctimas.
- f) Proponer modificaciones, si fuere necesario, y asesorar sobre el anteproyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos del Instituto de la Víctima presentado por el Director General.
- g) Asesorar sobre el Reglamento de la presente Ley y las reformas que sean necesarias para el mejor cumplimiento de sus objetivos.
- h) **Formular la solicitud de remoción del Director o Directora General del Instituto de la Víctima al Congreso de la República cuando hubiere incurrido en un grave incumplimiento de sus funciones.**

Cuando el Consejo deba deliberar sobre las funciones establecidas en las literales a), b) y h) el Director o Directora General del Instituto de la Víctima no podrá estar presente en la sesión.

Artículo 14. Reuniones y dietas del Consejo.

El Consejo del Instituto de la Víctima deberá reunirse de forma ordinaria por lo menos una vez cada dos meses o un máximo de cuatro veces dentro de dicho plazo.

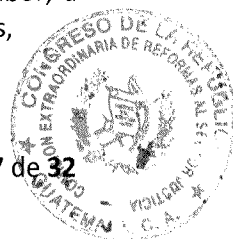
Podrán reunirse extraordinariamente las veces que consideren necesario.

Sus integrantes únicamente podrán cobrar dietas por la participación en reuniones ordinarias.

El reglamento regulará esta materia.

Artículo 15. Actualización.

El Consejo del Instituto de la Víctima deberá incluir dentro de sus políticas la actualización permanente de su personal y la sensibilización de la población guatemalteca sobre su labor, a través de los diferentes medios de comunicación, así como por medio de talleres, seminarios,





00000041

*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C.A.*

conferencias, foros y programas de pasantía con universidades nacionales e internacionales, **con el Ministerio de Educación a nivel diversificado, así como a través de Ley del Servicio Cívico.**

Artículo 16. Dirección General.

La Dirección General está integrada por un Director o Directora y por personal de apoyo profesional y técnico.

El Director o Directora General es el o la representante legal del Instituto de la Víctima y su nombramiento será para un periodo de cuatro años.

El Director o Directora General del Instituto de la Víctima será nombrado por el Congreso de la República.

Para el efecto, el Consejo del Instituto de la Víctima convocará a concurso público a efectos de elaborar una terna que será entregada al Congreso de la República para que dentro de los quince (15) días de haberla recibido realice la elección respectiva.

En los aspectos no contemplados en la presente Ley, en especial en lo concerniente a los principios, la verificación de requisitos y la selección de los candidatos, el proceso de elección se ajustará a lo establecido en la Ley de Comisiones de Postulación y en el Reglamento de la presente Ley.

El Pleno del Congreso de la República podrá remover al Director o Directora General, por grave incumplimiento de sus funciones.

El pedido de remoción deberá solicitarlo el Consejo del Instituto, necesitando para ello el voto favorable de dos tercios del total de miembros del mismo.

Artículo 17. Requisitos e impedimentos:

Para ser Director o Directora General se requiere:

1. Ser guatemalteco o guatemalteca de origen.
2. Estar en el pleno uso de sus derechos civiles.
3. Poseer grado universitario de licenciatura como médico y cirujano, licenciatura en ciencias jurídicas y sociales, licenciatura en psicología, licenciatura en trabajo social y otros que sean afines.
4. Con estudios y/o experiencias comprobados en victimología o atención a víctimas.
5. Tener, por lo menos, cinco años de experiencia en el ejercicio de la profesión forense y/o administración de instituciones similares.
6. De reconocida honorabilidad.

No podrán optar al cargo de Director o Directora General, las siguientes personas:

1. Quienes estén ejerciendo cargos en cualquiera de los Organismos del Estado.
2. Quienes tengan impedimento legal.





00000042

*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C.A.*

Artículo 18. Funciones.

Son funciones del Director o Directora General:

1. Realizar una gerencia eficaz y dinámica del servicio, para la debida atención y protección a las víctimas.
2. Nombrar y remover al personal del Instituto, de conformidad con las previsiones y requisitos de la presente ley y su reglamento, así como de otras leyes ordinarias.
3. Aplicar sanciones disciplinarias previstas por faltas administrativas cometidas por el personal del Instituto, en conformidad con la presente ley y su reglamento.
4. Elaborar y aprobar el plan de Política Institucional a favor de las víctimas.
5. Establecer y aprobar los criterios técnico-científico para la asignación y distribución de casos de atención y protección a personas víctimas.
6. Aprobar las normativas internas así como los manuales de trabajo.
7. Diseñar y garantizar una cobertura íntegra y eficiente del servicio, garantizando la presencia del personal capacitado en las diversas áreas para atender a las víctimas de violencia las veinticuatro horas del día.
8. Elaborar y aprobar los programas de capacitación para un desempeño eficaz y eficiente del servicio.
9. Elaborar el Reglamento del Instituto de la Víctima y las modificaciones que sean necesarias para el mejor cumplimiento de sus objetivos; trasladarlo al Consejo para recabar su opinión; y, proponerlo al Presidente de la República para su aprobación.
10. Celebrar convenios de cooperación institucional técnica, científica y académica con instituciones públicas y/o privadas, nacionales y/o internacionales, que sean necesarios para el fortalecimiento del Instituto.
11. Elaborar y aprobar, previa opinión del Consejo, el anteproyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos del Instituto.
12. Elaborar un informe anual y público que deberá ser presentado durante el mes de enero ante el Congreso de la República.
13. Nombrar y remover al auditor interno, **previa opinión del Consejo del Instituto.**
14. Resolver la apelación de la resolución que se pronuncie acerca de las infracciones.
15. Desempeñar las demás funciones conformidad con los fines para los que fue creada la institución.





00000043

*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C.A.*

Artículo 19. Órganos de apoyo.

La Dirección General tendrá como órganos de apoyo:

- a) Secretaría General
- b) Secretarías de apoyo
- c) Unidad de planificación
- d) Unidad de Evaluación del Desempeño
- e) Unidad de Control Interno o Supervisión
- f) Asesoría Jurídica
- g) Unidad de Informática
- h) Unidad de Transporte

Artículo 20. Dirección de Asesoría Jurídica.

La Dirección de Asesoría Jurídica tiene a su cargo la intervención del Instituto de la Víctima en defensa de los derechos de las víctimas en el proceso penal, así como en los demás procesos o procedimientos que sean necesarios para cautelar tales derechos, sin perjuicio de las demás funciones que le otorgue la Ley. La Dirección de Asesoría Jurídica está integrada por abogados colegiados activos en pleno ejercicio de sus actividades profesionales, los que podrán ser:

- a) Abogados de planta, quienes serán funcionarios incorporados con carácter exclusivo y permanente en el Instituto, y
- b) Abogados externos, quienes serán contratados por el Instituto de la Víctima de conformidad al Reglamento respectivo.

Los abogados mencionados en este artículo serán considerados abogados del Instituto de la Víctima para efectos de las funciones que desarrollen, sea cual sea la modalidad bajo la cual estén contratados. Tendrán prohibido solicitar o aceptar pago, remuneración, beneficio o dádiva alguna por los servicios prestados, así como estarán afectos a los impedimentos que señala la Ley.

El reglamento de la presente ley establecerá las demás funciones, obligaciones, requisitos de Ingreso y **permanencia en el caso de haber gozado de beneficios de capacitación o becas**, y las prohibiciones **legales** para los abogados que integren la Dirección de asesoría jurídica.

Artículo 21. Dirección de Asistencia psicológica.

Está integrado por psicólogos y otros especialistas en la materia, en pleno ejercicio de sus actividades profesionales, teniendo las dos funciones principales siguientes:

1. **Brindar atención a la víctima para ayudarle en su salud mental, en específico:**
 - a) **Atención psicológica en crisis; y**





00000044

*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C.A.*

- b) **Terapia y seguimiento psicológico derivado del peritaje que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses realice, a requerimiento de Juez competente o de entidades relacionadas con el sistema de justicia.**

2. Coordinar con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses cuando sean necesarios peritajes conjuntos.

Las funciones, obligaciones y requisitos para ser parte de la Dirección de Asistencia Psicológica serán designadas en el reglamento de la presente Ley.

Artículo 22. Gratuidad en la prestación del servicio.

Los servicios que presta el Instituto de la Víctima son gratuitos.

Artículo 23. Prohibición para ejercer la profesión en la misma materia al salir del Instituto de la Víctima.

Los abogados de planta que presten asesoría jurídica en el Instituto de la Víctima no podrán nunca ejercer la defensa técnica de una persona imputada en un caso que hubiese sido atendido en el Instituto de la Víctima, mientras hubiere laborado allí.

Esta prohibición, de acaecer dentro de un proceso, deberá hacerse valer y pedir que cese a solicitud de la parte que se considere afectada y el juez o tribunal que conozca dicha petición resolverá sin más trámite en la misma audiencia donde se requiera, ordenando al asesorado que elija nuevo abogado, y en su defecto, solicitará al Instituto de la Defensa Pública Penal que le nombre uno, cuando proceda.

Artículo 24. Dirección de Asistencia Social.

Está integrado por trabajadores sociales y otros profesionales en atención social en pleno ejercicio de sus actividades profesionales.

Darán atención especializada a las víctimas y/o sus familiares desde que las mismas se presenten a cualquiera de las dependencias del Instituto.

Las funciones, obligaciones y requisitos para ser parte de la Dirección de Asistencia Social serán designadas en el reglamento de la presente Ley.

Artículo 25. Personal auxiliar, administrativo y de auditoría.

El personal financiero y administrativo deberá realizar las funciones que le asigne el Director General del Instituto. Sus funciones, obligaciones y requisitos serán designados en el reglamento de la presente ley.





00000045

*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C.A.*

Artículo 26. Auditoría Interna.

La oficina de Auditoría Interna ejercerá labores permanentes de fiscalización y vigilancia, de conformidad con la presente Ley y su Reglamento. En particular:

- a) Asesorar al Director o Directora General y al Consejo, cuando proceda, en cuanto a la idoneidad de los sistemas, métodos y procedimientos de control interno que requiera el Instituto de la Víctima y que estén sometidos a consideración y aprobación del Director o Directora General.
- b) Verificar regularmente en el Instituto, la aplicación de los procedimientos de control interno y el cumplimiento de los reglamentos, disposiciones y procedimientos administrativos.
- c) Verificar regularmente la situación del control de la gestión, financiero y de resultados del Instituto.
- d) Informar al Director o Directora General y al Consejo sobre los aspectos anteriores, para lo cual podrá emitir informes específicos en cumplimiento de sus gestiones de fiscalización y vigilancia, y sus conclusiones y recomendaciones en conformidad a las mismas.
- e) Presentar semestralmente, el jefe de la Oficina de Auditoría Interna, informe detallado acerca del conjunto de las acciones desarrolladas durante dicho período.
- f) Presentar informe detallado acerca de la ejecución de fondos provenientes de aportes no reembolsables de la cooperación bilateral, multilateral, así como, de los provenientes de las Organizaciones No Gubernamentales del exterior.

Los aspectos no contemplados en la presente ley respecto de la Oficina de Auditoría Interna serán establecidos en el reglamento del Instituto.

Artículo 27. Auditor Interno.

La Oficina de Auditoría Interna estará dirigida por el Auditor Interno, quién será nombrado por el Director o Directora General. Deberá ser Contador y Auditor Público, Economista o Administrador de Empresas, no encontrarse sujeto a inhabilidades y deberá tener experiencia en fiscalización y vigilancia administrativa y financiera.

Durará cuatro (4) años en el cargo, pudiendo ser reelegido. Podrá ser removido por grave incumplimiento de sus deberes por el Director o Directora General, previa opinión favorable del Consejo.





000000046

*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C.A.*

**CAPITULO V
PRESUPUESTO**

Artículo 28. Presupuesto.

El Ministerio de Finanzas Públicas asignará anualmente en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, los recursos necesarios para cubrir los gastos del Instituto de la Víctima, de acuerdo al proyecto de presupuesto que éste presente.

Adicionalmente también integrarán los fondos del instituto: los aportes no reembolsables de la cooperación internacional y de Organizaciones No Gubernamentales nacionales o extranjeras; las herencias, legados y donaciones.

La ejecución del presupuesto estará sujeta a los controles y fiscalización de los órganos correspondientes del Estado.

**TITULO II
CAPITULO I
DE LA ASESORIA Y ATENCION A LA VICTIMA**

Artículo 29. Servicios.

El Instituto de la Víctima prestará servicios a la víctima y a las personas agraviadas, cuando proceda, a través de asesores legales, psicólogos, psiquiátricos y trabajadores sociales para su atención integral.

El Instituto de la Víctima brindará asesoría a la víctima, la cual estará dividida en las siguientes áreas:

- a) Asesoría Jurídica. El Instituto de la Víctima proporcionará asesoría jurídica gratuita a la persona que desee constituirse como querellante adhesiva dentro de un proceso penal y que derivado de la comisión de un hecho delictivo haya sufrido daños físicos, mentales, emocionales y materiales. Si posteriormente a la participación de la víctima dentro del proceso ésta desiste injustificadamente, el usuario asumirá el reembolso correspondiente a los honorarios profesionales, conforme arancel y costas procesales ocasionadas.
- b) Atención Psicológica y psiquiátrica. Sin perjuicio del trabajo realizado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses -INACIF- o las unidades de atención existentes en entes públicos y/o privados, el Instituto de la Víctima apoyará psicológica y psiquiátricamente a las personas víctimas de un delito con el objetivo de darles seguimiento o acompañamiento así como desarrollar las acciones





00000047

*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C.A.*

- c) profesionales pertinentes para contrarrestar las secuelas emocionales que hayan sido provocadas por la comisión de un delito.
- d) Atención Social. El Instituto de la Víctima apoyará en la reincorporación de las víctimas de un delito a la sociedad, propiciando su incorporación en forma igualitaria, brindado para ello la asistencia que esté dentro de su competencia.

Artículo 30. Funciones del personal.

El personal que integra las áreas del artículo anterior, deberá, según el área en la que se desempeñe y las disposiciones del reglamento:

- a) Acompañar a comparecer y a declarar a las víctimas del delito.
- b) Acudir con las víctimas menores de edad y personas con discapacidad, a las diligencias de la fiscalía o judiciales.
- c) Defender sus derechos ante el Organismo Judicial y Ministerio Público.
- d) Acompañar a la víctima durante todo el proceso penal.
- e) Representar a la víctima en las audiencias necesarias, por su seguridad, en cumplimiento con los requisitos establecidos en la ley.
- f) Actuar como mandatario judicial cuando la víctima lo acepte.
- g) Mantenerse informado de las actuaciones y diligencias realizadas por el Ministerio Público y las resoluciones emitidas por el Organismo Judicial sobre el caso concreto de la víctima.
- h) Procurar que se proteja la integridad de las víctimas en las diligencias en que intervengan, especialmente cuando se trate de menores de edad y personas con discapacidad.
- i) Proporcionar al Ministerio Público en forma inmediata todos los datos o elementos de prueba que la víctima informe, para que el Ministerio Público diligencie o investigue, dejando constancia de su recepción, con el objeto de la realización de peritajes o diligencias, que conduzcan a acreditar los elementos de tipo penal y a establecer la probable o plena responsabilidad del o los inculpadados.
- j) Acompañamiento o derivación para la gestión de trámite de medidas de seguridad y protección.
- k) Orientar y asistir a los lesionados y enfermos que, como consecuencia de un delito, sean internados en hospitales públicos o estén bajo tratamiento en otras instituciones de salud.
- l) Efectuar visitas de cualquier naturaleza para constatar el grado de afectación en la condición socioeconómica de la víctima y el daño social y patrimonial que la comisión del delito le haya provocado.
- m) Facilitar el acceso a la asistencia médica y terapia de rehabilitación física para las víctimas.





00000048

*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C.A.*

- n) Atender a las víctimas aplicando las medidas psicoterapéuticas de urgencia y la terapia postraumática que resulte necesaria.
- o) Determinar el daño psicológico o la afectación emocional de la víctima, para efectos de la reparación del daño moral.
- p) Aceptar el cargo de perito en los casos que procede y rendir la protesta de ley ante el tribunal correspondiente.
- q) Elaborar dictámenes sobre el daño sufrido por la víctima, ratificándolo ante la autoridad competente.
- r) Las demás que disponga el Consejo.

**CAPITULO II
DE LA REPARACION DEL DAÑO**

Artículo 31. Reparación del daño.

Es obligación de los abogados del Instituto informarle a la víctima, oportunamente, que tiene los siguientes derechos en relación a la reparación del daño:

- a) A exigir del responsable del delito la restitución de la cosa y, si no fuere posible, al pago de su valor actualizado por el juez a partir del momento de la perpetración del ilícito.
- b) A la reparación del daño material y a la indemnización de los perjuicios del delito.
- c) Si se trata de delitos contra el honor, a que a costa del responsable, se publique la sentencia condenatoria en uno de los diarios de mayor circulación cuando la víctima lo solicite como una fórmula reparadora del daño moral.
- d) A que el Ministerio Público le entregue en depósito los vehículos, objetos, derechos y valores de su propiedad, que hayan tenido relación con el delito, previa inspección ministerial, debiendo en su caso sujetarse a lo dispuesto por las leyes; salvo en aquellos casos que la retención sea indispensable para la eficacia de la persecución penal.
- e) A exigir al Ministerio Público que recurra en apelación los autos que nieguen las medidas precautorias de embargo o restitución de derechos, así como la sentencia definitiva cuando no condene a la reparación del daño o imponga una cantidad inferior a la reclamada, cuando no se haya constituido como querellante adhesivo.

**CAPITULO III
DE LA RED NACIONAL DE DERIVACION PARA LA ATENCION A VICTIMAS DE DELITOS**

Artículo 32. Responsabilidad.

Para fortalecer la asistencia integral a las víctimas del delito, el Instituto de la Víctima a través de la Dirección General, coordinará con el Ministerio Público la articulación de la Red Nacional de





00000049

*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C.A.*

Derivación para la Atención de Víctimas de Delitos, también se le denominará la Red de Derivación.

Artículo 33. Red de Derivación.

Se denomina Red de Derivación al conjunto de organizaciones multidisciplinarias, gubernamentales, no gubernamentales, organizaciones internacionales y personas individuales, que prestan servicios a víctimas, realizan investigaciones victimológicas y criminales, promueven el desarrollo de modelos de atención victimológica, y desarrollan actividades de asistencia social o de beneficencia pública y privada vinculadas a la materia y que han firmado convenios de cooperación interinstitucional.

Artículo 34. Objetivo de la Red de Derivación.

La Red de Derivación proporcionará y promoverá la prestación de servicios legal, médico, psicológico, económico y social a las personas víctimas y **agraviados**, que soliciten y necesiten atención. Estos servicios podrán proporcionarse directamente por el Instituto de Atención a la Víctima o en coordinación con la Red de derivación.

Artículo 35. Cobertura geográfica.

Las redes de derivación funcionarán a nivel nacional. Deberán conformarse redes a nivel local, de manera que se facilite a las personas el acceso a los servicios de la forma más inmediata posible.

Artículo 36. Coordinación.

El Instituto de la Víctima para cumplir con la aplicación de la red deberá:

- a) Elaborar políticas de coordinación con las instituciones que conforman la red
- b) Promover convenios o cartas de entendimiento entre las instituciones de la red que otorguen servicios.
- c) Actualizar y ampliar constantemente la base de datos de instituciones para que conformen la red de derivación del Instituto de la Víctima.
- d) Promover y ejecutar con la Red estudios de victimología.

Artículo 37. Tipos de apoyo y servicios.

La Red de Derivación proporcionará, en la medida de sus posibilidades, el apoyo y servicios que correspondan según la naturaleza y especialidad de cada una, que en términos generales se enmarcan en lo siguiente:





00000050

*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C.A.*

- a) Atención psicológica y/o psiquiátrica
- b) Atención médica inmediata incluirá hospitalización, exámenes clínicos, de gabinete o de laboratorio, atención de emergencia, atención, curativa, provisión de medicamentos, prótesis, rehabilitación física, odontológica, y otras que pueda prestar conforme esté en sus posibilidades.
- c) Asesoría y orientación legal.
- d) Elaboración de estudios socioeconómicos y/o informes sociales.
- e) Albergue, alimentación, vestuario y transporte.
- f) Comunicación y promoción social.
- g) Servicios educativos.
- h) Capacitación laboral o de otro tipo.
- i) Servicios de intérprete.
- j) Otros servicios afines.

Artículo 38. Registro de personas especializadas en el tema de atención a la víctima.

El Instituto de la Víctima deberá llevar un registro de organizaciones no gubernamentales o personas individuales especializadas en el tema de atención integral y protección a la víctima de violencia que conformen la red de derivación.

**TITULO III
CAPITULO I**

REGIMEN DISCIPLINARIO DEL INSTITUTO

Artículo 39. Principios generales.

Son principios generales que inspiran la presente ley los siguientes:

- a) Legalidad. Sólo podrá imponerse sanción disciplinaria cuando se encuentre preestablecida por la realización de acciones u omisiones previstas como falta y siguiendo el procedimiento establecido en la presente ley y su reglamento.
- b) Debido Proceso. Nadie puede ser sancionado sino en virtud de que se demuestre su responsabilidad administrativa, tras haber sido oído y vencido conforme a los procedimientos establecidos en la presente ley y su reglamento. Se garantizará el derecho a la defensa, ya sea que el sujeto a proceso se defienda personalmente o solicite la aceptación de su actuación mediante abogado, a su costa. Los procesos administrativos serán llevados adelante en un plazo razonable.
- c) Non bis in ídem. Nadie puede ser sancionado administrativamente dos veces por el mismo hecho.
- d) Independencia. La responsabilidad administrativa es independiente de la responsabilidad penal.





00000051

*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C.A.*

- e) Aplicabilidad. El Régimen disciplinario es aplicable a los empleados y funcionarios del Instituto. El personal contratado por servicios personales y profesionales, se registrará por las cláusulas del contrato y demás leyes vigentes en el país.
- f) Responsabilidad. La infracción de las normas relativas al régimen disciplinario por parte de quienes están obligados a aplicarlas, originará las responsabilidades legales que correspondan.

Artículo 40. Faltas y Sanciones.

1. Faltas. Las faltas se clasifican en: leves, graves y muy graves. El reglamento del Instituto de la Víctima establecerá la descripción de cada una de las faltas conforme a dicha clasificación.
2. Sanciones.
- a) Por falta leve se sancionará con amonestación escrita.
- b) Por falta grave se sancionará con suspensión de 10 a 30 días laborales, sin goce de salario.
- c) Por falta muy grave, se sancionará con la suspensión de 31 días a 90 días laborales sin goce de salario o con destitución.

Artículo 41. Procedimiento e intervinientes.

La dirección de asesoría jurídica es la encargada de la realización de la investigación interna en el caso de actos que puedan constituir faltas administrativas o ilícitos penales debiendo remitir su informe al Director del Instituto.

De tratarse de una posible falta administrativa, el Director del Instituto de la Víctima resolverá lo pertinente conforme al procedimiento disciplinario. En el caso que se dicten resoluciones por infracción grave y muy grave las mismas podrán apelarse por medio del recurso de reposición ante el Director. El Director procederá a destituir al empleado o funcionario cuando se encuentre ejecutoriada la resolución que impone la sanción de destitución.

De tratarse de un posible ilícito penal, el Director del Instituto de la Víctima remitirá los antecedentes al Ministerio público.

Toda sanción que quedé firme se anotará en el expediente del funcionario o empleado, sin perjuicio que, una vez cumplida la misma y transcurrido un plazo igual al período de prescripción según la gravedad de la falta que se cometa, dicha anotación sea cancelada y borrada automáticamente del mismo.

El Reglamento definirá los demás aspectos del procedimiento administrativo disciplinario.





00000052

*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

Artículo 42. Prescripción.

La responsabilidad disciplinaria prescribe a los seis meses de ser cometida la falta leve, al año de cometerse la falta grave y a los dos años en el caso de falta muy grave. El inicio del procedimiento disciplinario suspende el plazo de prescripción.

**TITULO V
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS**

Artículo 43. Se reforma el numeral 7 del artículo 82 del Decreto 51-92, del Congreso de la República, Código Procesal Penal el cual queda así:

"Artículo 82. Desarrollo. La audiencia se desarrollará de conformidad con lo siguiente: {...)

7. El querellante legalmente acreditado podrá intervenir en la audiencia a continuación del fiscal, en cada una de sus intervenciones. Las partes no podrán oponerse a la presencia del querellante en la misma. **La víctima presente en la audiencia podrá ser escuchada si así lo desea**".

Artículo 44. Se adiciona la literal h. al segundo párrafo del artículo 117 del Decreto 51-92 del Congreso de la República, Código Procesal Penal el cual queda así:

"h. A ser representado por un abogado del Instituto para la Atención Integral y Protección a víctimas de Violencia cuando la ley que regula dicha institución le otorgue el derecho."

Artículo 45. Se adiciona un último párrafo al artículo 117 del Decreto 51-92 del Congreso de la República, Código Procesal Penal el cual queda así:

"(A) estar representado o hacerse acompañar en todas las actuaciones que le permite el presente código por un abogado del Instituto de Atención Integral y Protección a Víctimas de Violencia."

Artículo 46. Se reforma el artículo 120 del Decreto 51-92 del Congreso de la República, Código Procesal Penal el cual queda así:

"ARTICULO 120. Intervención. El querellante por adhesión intervendrá solamente en las fases del proceso hasta sentencia, conforme lo dispuesto por este Código. Estará excluido del procedimiento para la ejecución penal, **salvo en cuanto a la aplicación de medidas de seguridad**".

Artículo 47. Se reforma numeral 1 del artículo 124 Decreto 51-92 del Congreso de la República, del Código Procesal Penal, el cual queda así:

"1. Cuando no se haya ejercido previamente la acción civil derivada de los perjuicios ocasionados por el hecho, la acción de reparación podrá ejercerse en el mismo proceso penal una





00000053

*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C.A.*

vez dictada la sentencia condenatoria. El juez o tribunal que dicte la sentencia de condena, cuando exista víctima determinada, en el relato de la sentencia se convocará a los sujetos procesales y a la víctima o agraviado a la audiencia de reparación, la que se llevará a cabo dentro de los tres días siguientes".

Artículo 48. Se reforma el segundo párrafo y se adiciona un tercero al artículo 495 Decreto 51-92 del Congreso de la República, del Código Procesal Penal los cuales quedan así:

"Los incidentes relativos a la libertad anticipada y todos aquellos en los cuales, por su importancia, el juez lo estime necesario, serán resueltos en audiencia oral y pública citando a los testigos y peritos que deban informar durante el debate.

La víctima o agraviado deberán ser citados a dicha audiencia para efectos de que se pronuncien sobre la aplicación de medidas de seguridad. La audiencia se celebrará con quienes asistan, una vez que hayan sido citados todos los interesados en conformidad al presente artículo".

Artículo 49. Se reforma el último párrafo del artículo 495 del Decreto 51-92 del Congreso de la República, Código Procesal Penal, el cual queda así:

"El juez de ejecución vigilará, además, el cumplimiento de las condiciones impuestas, las que serán reformables de oficio o a petición del condenado y su defensor, del Ministerio Público, o del querellante o del agraviado **y/o la víctima**".

Artículo 50. Se reforma primer párrafo del artículo 497 del Decreto 51-92 del Congreso de la República, Código Procesal Penal, el cual queda así:

"Artículo 497.- Revocación de la Libertad Condicional.

Siempre que no proceda la libertad condicional por unificación de sentencias o penas, o durante el período de su otorgamiento el condenado incurriere en nuevo delito o violare las medidas de seguridad impuestas, el incidente de revocación será promovido de oficio o a pedido de ministerio público, del querellante o **del agraviado y/o la víctima**".

Artículo 51. Se reforma el artículo 17 del decreto 22-2008 del Congreso de la República, Ley Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer, el cual queda redactado de la forma siguiente:

"Artículo 17. Fortalecimiento Institucional. La Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y en contra de la Mujer –CONAPREVI-, es el ente coordinador, asesor, impulsor de las políticas públicas relativas a reducir la violencia intrafamiliar y la violencia en contra de las mujeres.

Corresponde al Estado el fortalecimiento e institucionalización de las instancias ya creadas, para el abordaje de la problemática social de violencia contra la mujer, para asegurar la sostenibilidad de





00000054

*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C.A.*

las mismas, entre ellas: la CONAPREVI, la Defensoría de la Mujer Indígena -DEMI-, la Secretaría Presidencial de la Mujer -SEPREM-, **así como el servicio de asistencia legal gratuita a víctimas que presta el Instituto para la Atención y Protección Integral a las Víctimas de Violencia. Asimismo,** se garantizará el fortalecimiento de otras organizaciones no gubernamentales en igual sentido”.

Artículo 52. Se reforma la literal g) el artículo 19 del decreto 22-2008 del Congreso de la República, Ley Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer, el cual queda redactado de la forma siguiente:

“g) Fortalecimiento del Instituto para la Atención y Protección Integral a las Víctimas de Violencia para la prestación del servicio de asistencia legal gratuita”.

Artículo 53.

El Congreso de la República dentro de los quince días siguientes de haber entrado en vigencia la presente Ley convocará a las instituciones que deberán integrar el primer Consejo del Instituto de la Víctima para la atención Integral y Protección a Víctimas de Violencia.

Las organizaciones de la sociedad civil y personas individuales especializadas en el tema de atención integral y protección a víctimas de violencia deberán proceder a inscribirse en el Registro que establece la presente ley dentro de los treinta (30) días siguientes a su entrada en vigencia para efecto de poder participar en el proceso de elección de sus representantes en el primer Consejo. La elección de los representantes, a que hace referencia el artículo 12, se realizará dentro de los cuatro meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley.

Artículo 54.

En tanto se designa Director o Directora General, sus funciones serán cubiertas por el Consejo, el cual tomará sus decisiones por mayoría absoluta.

Artículo 55. Presupuesto inicial.

Se establece la obligación del Estado de incluir una asignación inicial de veinticinco millones de quetzales (Q.25,000,000.00) en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, para dar cobertura a los gastos de instalación, organización y operación del Instituto para la Atención Integral y Protección a Víctimas de Violencia. Estos recursos constituirán fondos privativos del Instituto para la Atención Integral y Protección a Víctimas de Violencia.





00000055

*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C.A.*

Artículo 56. Designación del primer Director o Directora General.

Inmediatamente de emitido el Reglamento, de conformidad a éste, el Consejo convocará a concurso público para proceder a la designación del Director. El cierre del proceso y designación del Director deberá efectuarse dentro del plazo de treinta (30) días de abierto el concurso.

Artículo 57. Reglamento.

El Director o Directora General del Instituto para la Atención Integral y Protección a Víctimas de Violencia deberá elaborar el reglamento correspondiente dentro de los sesenta días siguientes de la vigencia de la presente Ley, **trasladarlo al Consejo para recabar su opinión y remitirlo al Organismo Ejecutivo para su aprobación.**

Artículo 58. Derogatoria.

Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente ley, **con excepción de aquellas que reconozcan derechos y garantías a las víctimas de violencia.**

Artículo 59. Vigencia.

El presente Decreto **fue aprobado con el voto favorable de más de dos terceras partes del total de Diputados que integran el Congreso de la República** y entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN.
EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL DIA
_____ DEL MES _____ DE _____.

